

Santiago, seis de junio de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Gabriel Lara Gómez, en representación de don Christopher Jonathan Pabst Mitrovic, demandante en autos sobre tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y cobro de prestaciones, y, en subsidio, despido injustificado, Rit T-1801-22, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro señor Hernán Crisosto Greisse, ministra suplente señora María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado integrante señor Sebastián Hamel Rivas, fundado en que -a su parecer- dictaron con falta y abuso grave la sentencia de 14 de diciembre de 2023, que confirmó la pronunciada por el tribunal de primer grado que hizo lugar a la excepción de caducidad opuesta.

Explica que la falta o abuso grave se configura al no considerar la real fecha de inicio del procedimiento, pues si bien se reconoce que ocurrió mediante una solicitud de medida prejudicial, se fija su inicio en el día 17 de octubre de 2022, en circunstancias que fue requerida el 3 de octubre de 2022, según consta en autos Rit O-6118-22, en que se dispuso su reingreso como causa Rit T, correspondiente a los juicios sobre tutela laboral, lo que fue cumplido el 17 de octubre de 2022; por lo que es el 3 de octubre de 2022 que debe considerarse a efectos de interrumpir los plazos previstos en los artículos 168 y 489 del Código del Trabajo, ninguno de los cuales había vencido a la época en que se requirió la intervención judicial, manifestando la voluntad de la parte de accionar.

Asimismo, la resolución impugnada sostiene que la gestión prejudicial concluyó mediante resolución de 27 de julio de 2023 y que la demanda se interpuso el 13 de septiembre de 2023, fuera del plazo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil; no obstante que, por una parte, la aludida resolución, en su punto 5°, indica que *“la requerida ha omitido aportar los correos electrónicos emanados de la casilla del solicitante aduciendo estar este servicio entregado a un tercero, argumento que no resulta atendible dado que tal externalización es por cierto inoponible a quienes contraten con ella y, en particular, a sus dependientes. En consecuencia, se acoge la reposición solo en cuanto se tiene por no cumplida la exhibición de la totalidad de los correos enviados y recibidos en la casilla electrónica Cristopher.pabst@bhp.com, y se la rechaza en lo demás pedido pretendido”*, y que, por otra, la norma citada regula el plazo que rige respecto de medidas prejudiciales precautorias, pero no aplica tratándose de las simplemente prejudiciales, cual es el caso.



Solicita se acoja el recurso de queja, declarando que se incurrió en la falta o abuso denunciado y se enmiende la resolución recurrida, rechazando la excepción de caducidad opuesta y disponiendo la continuación del proceso laboral.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalan que para dictar la resolución impugnada tuvieron en consideración los presupuestos fácticos contenidos en la apelada, conforme a la cual *“consta de los antecedentes revisados en el sistema informático de tramitación de causas ingreso de gestión preparatoria por medida prejudicial con fecha 17 de octubre de 2022 esto es, transcurridos más de 90 días contados desde el término de la relación laboral. Que consta asimismo, que la gestión prejudicial concluyó mediante resolución de fecha 27 de julio de 2023, interponiéndose la demanda respectiva con fecha 13 de septiembre de 2023”*, sin que, deducido el recurso de apelación, el recurrente justificara la argumentación en cuanto a que la resolución recurrida adolecía de un error al haberse ingresado la medida prejudicial el 3 de octubre de 2022 y no el día 17 de ese mes, conforme a los autos RIT O-6118-2022, que darían cuenta del cambio de procedimiento aplicado, por lo que estiman no haber incurrido en falta o abuso que amerite ser corregida por la vía disciplinaria.

Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que la magistratura recurrida -al decidir como lo hizo- haya incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, la resolución impugnada tiene dos fundamentos, al sostener que la tramitación se inició *“con fecha 17 de octubre de 2022, esto es, transcurridos más de 90 días contados desde el término de la relación laboral”*, para luego agregar que *“consta asimismo, que la gestión prejudicial concluyó mediante resolución de fecha 27 de julio de 2023, interponiéndose la demanda respectiva con fecha 13 de septiembre de 2023”*.

En cuanto al primero, cabe precisar que de los antecedentes consignados en el sistema informático de tramitación se advierte que es efectivo lo afirmado por el recurrente, pues la medida prejudicial probatoria fue requerida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el 3 de octubre de 2022, iniciándose la



causa Rit O-6118-2022, en que se dispuso su reingreso, lo que se cumplió originando los autos Rit T-1773-2022, en los que se ordenó un nuevo reingreso a fin de dejar cuenta que se trataba de una medida prejudicial, por lo que el día 17 de octubre de 2023, se comienzan a tramitar los antecedentes Rit T-1801-2022.

En tanto que respecto del segundo argumento de la sentencia impugnada, consta que luego que el tribunal, por decreto de 22 de junio de 2023, otorgara a la demandada un plazo de cinco días hábiles para incorporar a través de la oficina judicial virtual, mediante digitalización, los documentos requeridos exhibir, se plantearon diversos recursos de reposición que motivaron que el 27 de julio de 2023, se dictara aquella resolución que tuvo por parcialmente cumplida la medida, con lo que se puso término a su tramitación, sin que el demandante realizara gestión alguna sino hasta el 13 de septiembre de 2023, cuando interpuso la demanda oportunamente anunciada.

Sexto: Que, en consecuencia, pese a que la medida prejudicial fue requerida dentro de plazo, se estimó que la demanda no lo había sido, invocando para ello el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, supletoriamente aplicable al Código del Trabajo que, en concordancia con lo previsto en el artículo 444 de dicho cuerpo legal, establece un término de diez días contados desde la fecha en que la medida se hizo efectiva para interponer la demanda.

Como se ha dicho, por medio del presente recurso, el recurrente cuestiona la interpretación efectuada de la normativa señalada, pero no ofrece ninguna explicación sobre el retardo en la interposición de la demanda, que dedujo más de un mes y medio después que se diera por cumplida la medida prejudicial, sin haber acreditado la existencia de algún trámite o gestión previa que permitiera entender suspendido el término respectivo o de otra circunstancia que justificara su tan extensa inacción, así como tampoco se explica la razón por la que no recurrió a la judicatura a fin de solicitar una ampliación del plazo.

Séptimo: Que, al respecto cabe señalar que, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquellos, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que, en la especie, no concurre, por cuanto dicha magistratura se limitó a argumentar en torno al conflicto sometido a su consideración, arribando a conclusiones jurídicas que, en lo esencial, se enmarcan dentro de criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción, por lo



que el presente arbitrio, constituye, en definitiva, una mera expresión de la disconformidad del recurrente, que no es controlable por esta vía.

Octavo: Que, en ese contexto, y atendida la jurisprudencia de esta Corte referida al recurso de queja, se debe concluir que la magistratura recurrida no incurrió en falta o abuso grave susceptible de ser enmendada por la vía disciplinaria, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **rechaza** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro señor Hernán Crisosto Greisse, ministra suplente señora María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado integrante señor Sebastián Hamel Rivas.

Acordada con el **voto en contra** de las abogadas integrantes **señoras Etcheberry y Rojas**, quienes estuvieron por acoger el recurso en cuestión, por estimar que los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al aplicar el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil a un caso para el que no se encuentra previsto, dados los siguientes argumentos:

1° La norma, según se advierte de su lectura, no se refiere a cualquier medida prejudicial, sino sólo a las de carácter precautorio, lo que es claro pues su inciso primero señala “Aceptada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá el solicitante presentar su demanda en el término de diez días y pedir que se mantengan las medidas decretadas”, en tanto que el artículo anterior establece que “Podrán solicitarse como medidas prejudiciales las precautorias de que trata el Título V de este Libro” en las condiciones que señala.

2° Reafirma tal conclusión el examen del artículo 444 del Código del Trabajo, que en un contexto similar, a propósito del ejercicio de la función cautelar que la legislación asigna a la judicatura del trabajo, establece un idéntico plazo al solicitante, luego de aludir en su inciso primero a la necesidad de asegurar el resultado de la acción mediante la singularización de un patrimonio suficiente para garantizar el monto de lo demandado, agregar en el segundo que deben ser proporcionales a la cuantía del juicio, en tanto que el inciso cuarto, que es precisamente el que establece la sanción de la caducidad para el caso de no presentarse la demanda en el término de diez días, inicia indicando con toda precisión “Las medidas precautorias se podrán disponer...”.

3° Así de la dispositiva contenida en el Código del Trabajo como en el Código de Procedimiento Civil, en la parte que pudiera resultar supletoriamente aplicable, se advierte que no existe un término fatal para la interposición de la demanda cuando el procedimiento se ha iniciado con una medida prejudicial probatoria, la que sí debe ser planteada dentro de aquellos que establecen los



artículo 168 o 171 del código del ramo, de resultar pertinente; lo que no importa entender que queda entregada al arbitrio de la parte demandante la época de presentación de la demanda, pues siempre quedará sujeta a los plazos de prescripción que consagra el 510 del estatuto laboral.

Regístrese y archívese.

N° 251.673-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., señora María Soledad Melo L., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. Santiago, seis de junio de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a seis de junio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

